

Prólogos de Atilio Boron y Ofelia Fernández

SALIR DEL NEOLIBERALISMO

Aportes para un proyecto
emancipatorio en Argentina

Compilan José Seoane y Belén Roca Pamich



Emilio Taddei, Mabel Thwaites Rey, Claudio Katz, Emiliano
López, Martín Schorr, Viviana García, Esteban Rodríguez
Alzueta, Natalia Vinelli, Adrián Pulleiro y otros

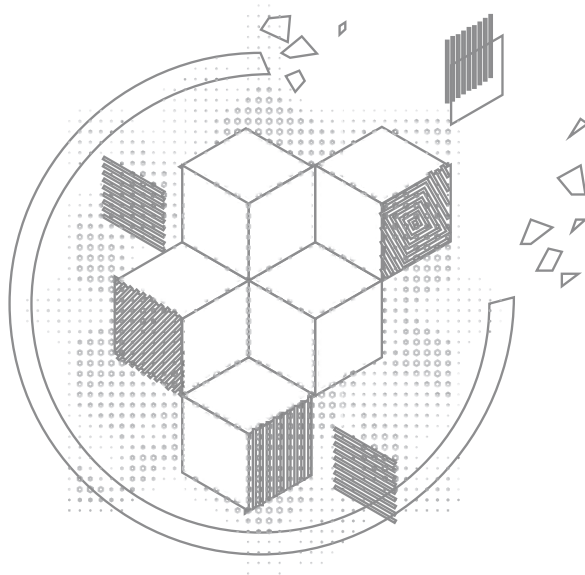
**BATALLA DE
IDEAS**

tricontinental
Instituto de investigación social

Compilan José Seoane y Belén Roca Pamich

SALIR DEL NEOLIBERALISMO

Aportes para un proyecto
emancipatorio en Argentina



**BATALLA DE
IDEAS**

tricontinental
Instituto de investigación social

Salir del Neoliberalismo.

Aportes para un proyecto emancipatorio en Argentina

Compiladores: José Seoane y M. Belén Roca Pamich

Colección Problemas Contemporáneos



*Se autoriza la reproducción parcial o total,
siempre y cuando sea sin fines de lucro y se cite la fuente*

Corrección y edición: Juana Ramella

Arte de tapa y diseño: Daniela Ruggeri

Batalla de Ideas Ediciones

Uruguay 37 - C1015AAA - CABA, Argentina

editorialbatalladeideas@gmail.com

Instituto Tricontinental de Investigación Social

Oficina Buenos Aires

Mitre 811 4º F, CABA, Argentina

<https://www.thetricontinental.org/>

ISBN: 978-987-47001-5-5

Impreso en Argentina, agosto 2019.

Hecho el depósito que marca la ley 11.123

Salir del neoliberalismo : aportes para un proyecto emancipatorio en Argentina / Emilio Taddei ... [et al.] ; coordinación general de José Seoane ; Belén Roca Pamich. - 1a ed. - San Telmo / Buenos Aires : Batalla de Ideas ; Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Tricontinental Instituto de Investigación Social, 2019. 250 p. ; 23 x 16 cm. - (Problemas contemporáneos ; 1)

ISBN 978-987-47001-5-5

1. Ciencia Política. 2. Relaciones Estado y Sociedad. 3. Comunicación. I. Emilio Taddei, II. Seoane, José, coord. III. Roca Pamich, Belén, coord.

CDD 320.82

**SEGURANZAS: LA
PRODUCTIVIDAD POLÍTICA DE
LOS ENEMIGOS Y EL GOBIERNO
DEL MIEDO EN EL ESTADO
NEOLIBERAL**

Esteban Rodríguez Alzueta

SEGURANZAS: LA PRODUCTIVIDAD POLÍTICA DE LOS ENEMIGOS Y EL GOBIERNO DEL MIEDO EN EL ESTADO NEOLIBERAL

*Esteban Rodríguez Alzueta **

Sabemos por experiencia propia —y tenemos a toda la década del noventa para poner de ejemplo— que los estados débiles no son incompatibles con los estados fuertes. Al contrario, cuando se contrae la mano izquierda del Estado, tiende a expandirse la mano derecha. Y ello se explica por dos motivos. Primero, porque hay que contener la marginalidad social, es decir, hay que evitar el devenir disfuncional de la masa marginal. Ya sea la disfuncionalidad económica (el delito callejero y predatorio) o la disfuncionalidad política (la protesta social). Hay que evitar que lo que sobra, irrumpa, moleste y cuestione. Segundo, porque los enemigos que se construyen a través del gobierno de la seguridad tienen la capacidad de recomponer consensos químicos y difusos. No es casualidad, entonces, que la seguridad se haya convertido en los últimos años, en Argentina y los países de la región, en la mejor pasarela para

* **Esteban Rodríguez Alzueta** es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Director del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales sobre violencias urbanas (LESyC) y la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de *Temor y control*; *La máquina de la inseguridad* y *Vecinocracia: olfato social y linchamientos*.

los políticos, sobre todo para aquellos que se agarran de las pancartas neoliberales.

Como sugirió alguna vez Nils Christie, si los funcionarios no pueden hacer política con el trabajo, porque cierran fábricas y cada vez hay más desocupación y aumenta nuevamente la pobreza y la marginación; si no pueden hacer política con la salud y la educación, puesto que esas áreas se convirtieron en el blanco de rigor para los recortes presupuestarios alentados por los organismos financieros internacionales; si no pueden hacer política con los jubilados, puesto que tienen que encarar una nueva reforma previsional; si no pueden hacer política con la vivienda, porque las tasas se fueron por las nubes y los créditos inmobiliarios se volvieron inaccesibles; si la inflación y la tarifas altas licuaron la capacidad de consumo de los ciudadanos; y si tampoco, para colmo, pueden hacer política con la corrupción, levantando las banderas de la justicia, porque los fiscales y los jueces, se encuentran en el banquillo de los sospechados, entonces se entiende que el gobierno se recueste sobre la gestión de la seguridad. A los funcionarios neoliberales les quedan muy pocos lugares para renovar sus credenciales o presentarse como merecedores de votos en el mercado de la política. Uno de los pocos temas donde pueden hacer pivote es la seguridad y por eso proponen más policías a cambio de votos.

No solo más policías, sino más penas, más cárceles. Crean nuevos delitos, agregan otras figuras a los códigos contravencionales, proponen bajar la edad de punibilidad, aumentan los presupuestos para estas carteras para surtir con más patrulleros, mejores y nuevas armas a las policías. Todo eso a cambio de votos. No es casual, entonces, que sus candidatos se agarren de la víctima, haciendo política con la desgracia ajena, manipulando el legítimo dolor que tienen las víctimas. De esa manera, el punitivismo de arriba empalma con el punitivismo de abajo, hecho de temor, resentimiento y

mucha indignación vecinal. Los candidatos aprendieron que el asesinato de una mujer embarazada en una salidera bancaria tiene la capacidad de no generar divisiones. Más allá de que uno sea macrista, kirchnerista, radical o trotskista, viva en una villa o un country, todos nos vamos a sorprender diciendo “¡qué barbaridad!”. La víctima tiene la capacidad de generar movimientos de indignación que pueden ser el mejor punto de apoyo para encarar las reformas punitivistas; el mejor punto de apoyo para recomponer las confianzas que se licuaron con las reformas económicas.

Cuando decimos “seguridad” estamos diciendo policía, porque tanto el gobierno como la vecinocracia tienen una concepción policialista de la seguridad. Una seguridad que, para el macrismo, empieza a confundirse con defensa, porque es sabido que la construcción de enemigos internos está desdibujando la distinción entre seguridad interior y defensa. Una seguridad que seguirá girando en torno al orden público, porque sabemos también que, desde esta concepción, la policía no está para cuidar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, sino las espaldas de los funcionarios.

No hay capital sin crimen

El pasaje del Estado social al Estado de malestar implica un endurecimiento de las políticas punitivas. Cuando el Estado abandona sus compromisos con la sociedad y el mercado laboral, y la vida deja de ser el objeto de políticas públicas inclusivas, universales y de oficio para ser subsidiada con prácticas políticas de contención, focalizadas y a requerimiento de parte (previa certificación de la pobreza), la muerte ocupa su lugar. El Estado ya no está para gestionar la vida, sino para administrar la muerte, es decir, la vida que no vale, el sobrante social, la desocupación crónica. Porque “muerte” no es solamente la muerte directa que llega a través de la represión

policial (gatillo fácil, torturas y desaparición). “Muerte” es, también, la muerte indirecta, es decir, todo aquello que crea condiciones para la muerte. Quiero decir, la falta de hospitales o insumos o equipamientos en esos establecimientos o en las salas sanitarias de los barrios es muerte porque crea condiciones para la muerte, que actualizan la muerte. Por supuesto que no se trata de una muerte espectacular, que llega de un día para el otro. Se trata de una muerte intelevisable, una muerte invisible. Una muerte que va calando los huesos de a poco, en cámara lenta, que puede identificarse en las estadísticas y en el rostro de las personas.

Los partidarios de las políticas neoliberales encuentran en el punitivismo no solo la oportunidad de contener la protesta social, sino de regular a la marginalidad. Más aún, el punitivismo, esto es, “la guerra a las drogas” y “la lucha contra el flagelo del delito”, son los artefactos a través de los cuales construyen chivos expiatorios que les permiten recomponer la legitimidad que rifaron con sus políticas económicas. A través de estas políticas de pánico moral, cuando las representaciones de los problemas no guardan proporción con lo que realmente sucede, los funcionarios buscan desviar el centro de atención. Se trata de desplazar la cuestión social con la cuestión policial, transformando los problemas sociales en litigios judiciales. Tomemos por caso la represión y judicialización de la protesta social. Aunque también, la criminalización y regulación de la pobreza.

En efecto, a la pobreza no solo hay que compartimentarla, sino regularla. Cuando la valorización del capital se hace también a través de los mercados informales e ilegales, cuando el capital, para optimizar sus costos financieros y recuperar la caída de la cuota de ganancia, necesita de la expansión de los mercados informales y el desarrollo de mercados ilegales, entonces, el capital le reclamará a los Estados contemporáneos que liberen la violencia. Porque el pasaje de los Estados

modernos a los Estados neoliberales coincide con el pasaje de la monopolización a la desmonopolización de la violencia. La violencia se desmonopoliza cuando se la terceriza en actores de la sociedad civil (sicariato, pistoleroismo, paramilitarismo, autodefensas, vigilantismo, linchamientos, venganza por mano propia, quemas de vivienda, saqueos colectivos, tomas de comisarías, etc.), pero, sobre todo, cuando los Estados licencian a las policías, es decir, cuando exceptúan a los policías a tener que rendir cuentas por sus acciones. No hay capital sin crimen, es decir, el capital encuentra en los ilegalismos un punto de apoyo para seguir valorizándose. Por un lado, porque provee la mano de obra barata que surte los mercados informales y, por el otro, porque capacita una fuerza de trabajo lumpen que mueve los mercados criminales que luego contribuyen a financiar a los mercados informales y las economías en los sectores más pobres. La violencia policial es la mano invisible de estos mercados. Porque estos, como cualquier mercado que opera en la legalidad, necesitan reglas que ordenen sus relaciones de intercambio. A las policías les toca aportar previsibilidad a los negocios y a la vez aportar marcos para resolver las eventuales contradicciones que puedan llegar a suscitarse. Se sabe, un conflicto en los mercados ilegales o informales difícilmente pueda tramitarse ante los tribunales formales. Sin embargo, alguien tiene que metabolizarlos. La policía, a través de la violencia, se encarga de ello. No se trata esta vez de una violencia negativa sino productiva, es decir, una violencia que produce un orden, produce subjetividades, identidades vulnerables, certidumbres y consensos. Hay un costado hegemónico en la violencia policial que tampoco hay que perder de vista.

El Estado de malestar necesita una policía esquizoide, es decir, una policía que esté presente de dos maneras distintas en la sociedad: allí donde hay viabilidad y capacidad de consumo, los controles policiales tienden a ser rigurosos y el estado no quiere que suceda absolutamente nada. Aquí rige la

“tolerancia cero” y el estado de derecho. La policía está para prevenir el delito y prevenir significa demorarse en aquellas conductas colectivas que, si bien no constituyen un delito, estarían creando las condiciones para que estos tengan lugar.

Tres cosas necesita el prudencialismo policial. Una, más facultades discrecionales, porque, para demorar o detener preventivamente, la policía no puede tener las manos atadas; dos, la participación de los vecinos alertas en las tareas de control, para mapearle a la policía la deriva de los grupos de pares que tanto miedo les producen (cultura de la delación); y tres, una legislación contravencional o convivencia que habilite a las policías a actuar en consecuencia. Necesita una legislación menor, que criminaliza la economía popular y las estrategias de sobrevivencia que desarrollan los actores más pobres para resolver problemas materiales concretos. Por ejemplo cuando referencia como problemas a los cuidacoches, trapitos, cartoneros, a la venta ambulante, a los artistas callejeros, las ferias, la comercialización de la comida callejera y la oferta de sexo en la vía pública; que criminaliza las estrategias identitarias y culturales desarrolladas sobre todo por los jóvenes para componer pertenencia (pasear por la ciudad, juntarse en las esquinas o plazas para consumo de drogas o alcohol, hacer ruido con las motitos tuneadas, pintar grafitis, carnavales, ribas barriales, etc.) y las estrategias políticas que desarrolla el activismo militante para expresarse libremente y agregar los intereses y problemas (volanteadas, acampes, radios abiertas y festivales callejeros, cortes de calle desplanificados y sin dejar vía alternativa, las pegatinas o la publicidad callejera que se haga al margen de la comunicación organizada a través del mercado, el uso de pirotecnia, etc.)

Eso en cuanto a las policías de prevención o proximidad, pero después están las policías de ocupación territorial que regulan los flujos poblacionales y de bienes. Porque allí donde no hay viabilidad o la viabilidad está acotada al sostenimiento de los

mercados ilegales o informales, donde se asientan la pobreza y la marginalidad social, los controles tienden a relajarse. El relajamiento no debe invitarnos a concluir que se trata de controles pacíficos. Al contrario, se vuelven más violentos. Aquí rigen la “mano dura” y el estado de excepción. Es decir, el Estado libera a la fuerza de toda forma, carnavaliza la violencia, la descontrola. La policía no está para prevenir el delito, mucho menos para perseguirlo, sino para regularlo. Regular significa varias cosas. Hay que regular los mercados informales, los mercados ilegales y regular también el delito callejero. El delito predatorio se regula, por un lado, a través de la “liberación de zonas”, es decir, abriendo un campo de entrenamiento para los jóvenes, a los efectos que desarrollen destrezas y habilidades que luego van a ser identificadas por los mercados criminales como recursos productivos. Y, por el otro, reclutando esa fuerza de trabajo calificada que necesitan aquellos mercados ilegales para generar valor. Pero también, selecciona periódicamente contingentes poblacionales para sacarlos de circulación y que pasen una temporada en la cárcel, en donde se produce finalmente el precariado de manera sistemática (encarcelamiento masivo, clasista y preventivo). Regular la pobreza significa disponer de múltiples puntos de control que testeen los accesos a la ciudad viable, sea a través de retenes, bajadas de bondi o detenciones identitarias. Prácticas de hostigamiento policial discriminatorias, abusivas y de mucha violencia moral que agreden la dignidad y subjetividad de las personas, cuestionando también su identidad.

Estamos, entonces, ante una policía que tiene una doble vida. Un estado esquizofrénico implica un policía que esté presente de formas distintas, según el territorio donde intervenga. Una policía que consolida y profundiza la brecha espacial, que reproduce y regula la desigualdad social. Porque hay un costado productivo de la marginalidad que también hay que regularla y se carga a la cuenta de las policías.

La regulación policial no es un problema de corrupción política. Los ilegalismos no son un accidente, una imperfección más o menos inevitable o una disfunción del sistema, sino un elemento absolutamente positivo del funcionamiento del sistema económico y social actual. La ley no está para ser cumplida. Como nos enseñó Michel Foucault, todo dispositivo legislativo siempre ha reservado espacios protegidos y provechosos en los que la ley puede ser violada, donde otros pueden ignorarla o cumplirla de vez en cuando, y finalmente otros donde las infracciones son sancionadas. La ley no está hecha para impedir tal o cual tipo de comportamiento sino para diferenciar las maneras de eludir la propia ley. Y de eso se ocupan los tribunales y la policía, las agencias encargadas de negociar el incumplimiento de la ley. Como dice el refrán: hecha la ley, hecha la trampa. Y las trampas no son gratuitas, tienen —como todo— un precio. Pero el enriquecimiento ilícito no es un problema de corrupción. El enriquecimiento existe, pero no es una finalidad sino el efecto. Detrás de la regulación policial no hay que buscar el enriquecimiento ilícito ni el financiamiento de la política, sino la contención de la pobreza y la valorización del capital. No hay capital sin crimen.

Construyendo al enemigo

La seguridad está hecha de acciones pero también de discursos. Esos discursos no ocupan un lugar menor, más aún cuando la seguridad es una materia que las provincias no han delegado en el gobierno federal. De modo que, si la Presidencia pretende hacer política con la seguridad, tiene que inventar problemas y ampliar su esfera de intervención fantaseando o sobredimensionando conflictos existentes, para llamar la atención. De allí que tenga que invertir mucha pirotecnia verbal en propagandas de agitación y campañas de ley y orden, enfocadas especialmente en determinados actores

que pasan a ser referenciados como productores de desorden, destabilizadores y violentos.

Las palabras que utilizaron para nombrar a esos actores tampoco fueron inocentes, con ellas los cargaban de sospecha y repulsión. El lector ya se imaginará en qué figuras estamos pensando: el narcovillero, el mapuche terrorista, el activista violento, la mafia gitana y el taquillero pibe chorro. Esos fueron los nuevos enemigos internos que propuso este gobierno para inflar los problemas. Las figuras fantásticas que le garantizaban ganar protagonismo en la pasarela de la política y, de esa manera, estar en mejores condiciones en las próximas elecciones para presentarse como merecedores de votos. El éxito de la seguridad es el fracaso de la economía. Un éxito hecho con mentiras que todos se la creen, empezando por el propio gobierno.

Las figuras no se eligieron al azar y tampoco cayeron del cielo. El gobierno sabe que, detrás de cada una de ellas, hay una memoria del miedo y operan imaginarios sociales autoritarios que no solo alimentan prejuicios, sino que al hacerlo se activan reclamos punitivos. Imaginarios de larga duración que mantenemos encendidos con nuestras series favoritas de Netflix u otros programas de entretenimientos para adultos, léase, los noticieros televisivos. Por eso, detrás del pibe chorro están actuando el malviviente, los villeros, los violentos de siempre, los barderos y faloperos, los ladrones profesionales, y el indio salvaje y malonero; del activista, trabajan las figuras del piquetero encapuchado, los descamisados, los rojos y el gaucho matrero; del narcovillero encontramos la vida promiscua y violenta de las villas y el negrito cabeza; y del mapuche terrorista, los guerrilleros, subversivos y los anarquistas tirabombas.

La construcción de chivos expiatorios no es un experimento que esté en el grado cero de la historia. Hay un bestiario nacional que aporta insumos morales para emprender todas

estas campañas. No es nuestra intención hacer un inventario y mucho menos un recorrido genealógico. Solo nos interesa señalar algunos presupuestos y dinámicas retóricas que operan detrás de la construcción de cada enemigo público.

En primer lugar, hay que señalar el contexto. Las campañas sacrificiales tienen un contexto particular: las crisis políticas. Los funcionarios están perdiendo la confianza de los sectores sociales que supieron reclutar, incluso están teniendo problemas para retener el consentimiento de sus seguidores favoritos. Las medidas que tomaron licuaron su capital político y empiezan a tener serias dificultades para dirigir al electorado que ganaron en elecciones anteriores. Frente a esas circunstancias, con la postulación de un enemigo buscan no solo desviar el centro de atención sino que al hacerlo quieren transformar los conflictos sociales en escándalos policiales y, en el mejor de los casos, en litigios judiciales. La política se judicializa y con ello se vacía la política de política. Además, cuando el enemigo revive viejos demonios, volver sobre estos implica resucitar antiguos conflictos que le permiten a los funcionarios alejarnos de la escena contemporánea.

En segundo lugar, el relato que se monta sobre los casos no guarda proporción con los hechos reales, contradicen las estadísticas y las investigaciones existentes. Sus puntos de apoyo no son los diagnósticos, sino la tapa de los diarios, el tratamiento truculento o sensacionalista que la televisión hace sobre los mismos y la propaganda política. Interpretaciones descontextualizadas y deshistorizadas que se concentran sobre los supuestos caracteres de los protagonistas enfocados espectacularmente. Las generalizaciones súbitas que hace la prensa sobre esos hechos son la mejor materia prima para postular víctimas sacrificiales. Y acá me gustaría insistir sobre el carácter performático que tienen las palabras. John Austen nos enseñó que el lenguaje no solo es descriptivo sino realizativo: “se pueden hacer cosas con palabras”, los discursos

producen efectos de realidad. Por eso, las palabras que los funcionarios eligen para nombrar a los eventos que identifican como problema nunca son inocentes, están cargados de ideología, tocan fibras nerviosas de la memoria colectiva que reavivan experiencias propias o ajenas de gran impacto.

Finalmente, está el momento sacrificial. Ya lo había recomendado Maquiavelo al príncipe: los enemigos se disponen para ser destruidos. El castigo que se propone para los enemigos no solo empalma con las demandas de la vecinocracia, sino que estará hecho con las mismas prácticas, el mismo temperamento. Se trata de un castigo ostentoso (un espectáculo), emotivo (apasionados, no racionales) y urgente (expeditivos o veloz). Un castigo anticipado y marcial. Castigos que, para llevarse a cabo, necesitan de la complicidad judicial, toda vez que licencia a las policías de tener que rendir cuentas por sus funciones, una justicia que descontrola a las policías y al hacerlo ampara y legitima la decisión del poder ejecutivo. Una justicia que tiende a comprar la versión que le vende la policía y los servicios de inteligencia. Una versión que luego será transformada en primicia por el *mainstream* periodístico. Una noticia que tiene la capacidad de ganarse la atención, transformarse en agenda y la partitura que luego estructura el juego de la política y quiere ordenar la conflictividad social.

Hacia una nueva agenda de seguridad democrática

La seguridad, entonces, la manipulación de la inseguridad ciudadana, está empujando al país cada vez más a la derecha. Pone a la democracia en lugares cada vez más difíciles para pensar cómo queremos vivir juntos, más tranquilos. Si el miedo encierra a la gente en su casa, la victimización de la víctima tiende a clausurar las discusiones. La agenda neoliberal es antipolítica, porque pone a la política más allá de cualquier debate. Desautoriza la política cuando estigmatiza a sus

dirigentes y la militancia social. Una agenda hablada con los tiempos urgentes de la víctima, con el temperamento afectado de la víctima, que confunde la moral con la política, no es una agenda sino un sermón para la televisión. Una agenda, finalmente, anti-intelectual en la medida que, cuando desplaza a los expertos de la escena, desautoriza las investigaciones que nutren los diagnósticos con vistas a elaborar políticas públicas de largo aliento. Una agenda, entonces, muy afín a los tiempos electorales, cortoplacista, hecha de respuestas urgentes para remar las coyunturas volubles habladas según las narraciones del periodismo truculento o sensacionalista.

Sabemos que la preocupación ciudadana por la inflación y la desocupación suele desplazar a la inseguridad. No son temas separados ni separables. La inseguridad económica se convierte en inseguridad ontológica y, cuando eso sucede, la gente empieza a elaborar estrategias securitarias para asignarle un rostro y ponerle un lugar al terror, para transformar el miedo abstracto en un miedo concreto y, de esa manera, calmar la angustia que eso genera.

De allí que gran parte de la seguridad tenga que dirimirse en el terreno de la economía, calmando la angustia, desactivando las cruzadas morales que meten pánico a la ciudadanía. Pero después de tanto neoliberalismo estamos parados en un lugar donde no hay soluciones a corto plazo. Todas las respuestas serán para el mediano y largo plazo, es decir, necesitan tiempo para carretear. Y ese tiempo, contar con tiempos largos, necesitará de un nuevo contrato social que nos permita sustraer todos los temas de la agenda securitaria de la coyuntura electoral. No solo hay que dejar de hacer coyunturalismo y dejar de hablar para los periodistas, diciéndole a la gente lo que esta quiere escuchar, también hay que salirse de la concepción policialista de la seguridad. Sabemos que los conflictos multifactoriales necesitan respuestas multiagenciales, es decir, respuestas que tienen que venir de distintas agencias. Son conflictos,

entonces, que reclaman una articulación creativa y exitosa entre las diferentes agencias del estado.

Más aún, esta es una conflictividad que reclama la participación de la sociedad civil organizada. Pero participar no es crear plataformas virtuales que canalicen las opiniones de los vecinos, ni generar reuniones con el comisario del barrio. Participar no es involucrar a los vecinos en las tareas policiales para que le mapeen al policía la deriva de los actores que tanto miedo le producen. Hay que participar a las organizaciones sociales no solo en la discusión y búsqueda de soluciones sino, sobre todo, en las tareas de control de las fuerzas de seguridad. Participación no es igual a delación. Una participación responsable implica que los actores puedan ponerse en el lugar del otro para pensar colectivamente los problemas. Para ello, un buen punto de partida pueden ser las mesas barriales de seguridad. Espacios que no participaban al ciudadano suelto, es decir, al vecino alerta sino a las organizaciones de la sociedad civil. Ahora bien, para que las organizaciones se involucren tienen que agendar los conflictos como problema y hacerlo sin contarse cuentos, dejando de lado los viejos prejuicios que, durante mucho tiempo, los ha mantenido alejados de estas cuestiones.

Por ejemplo, las organizaciones sociales tienen que saber que, si “no hay olfato policial sin olfato social”, si es cierto que detrás de la brutalidad policial está el prejuicio vecinal; entonces se duplicaron las tareas para cualquier gestión progresista y la militancia social. Así como hay que encarar una reforma policial (con capacitaciones en externados; protocolización de las funciones; y disposición de controles externos y un sistema de rendición de cuentas que completen a los controles internos), hay que desandar al mismo tiempo ese imaginario social autoritario que activa las pasiones punitivas. Y para eso, se necesita, no solo encarar campañas de largo aliento, sino un trabajo militante en la vida cotidiana en cada uno de los

barrios donde se milita. No hay que regalarle la “seguridad” a la derecha, hay que tomar este tema y agregarlo creativamente, tratando de reponer la historia en cada uno de los conflictos que quiera abordarse. Historizar implica contextualizar, abordar los temas con su telón de fondo, pero también acompañar a las juventudes en los barrios. Historizar sin romantizar al piberío, reconociendo los problemas que plantean aquellos para la vida cotidiana también. Problemas que hay que resolverlos más allá de los tribunales, creando nuevos marcos para pensar entre todos y todas esos problemas, imaginando respuestas creativas que no reproduzcan malentendidos entre las diferentes generaciones.

“Ni un pibe menos, ni una piba menos” quiere decir que hay que llegar antes. No hay que esperar que maten o torturen a alguien para activar la militancia. Llegar antes implica agendar el hostigamiento policial, pero también la estigmatización y violencia vecinal. Llegar antes significa que no todos los problemas se van a resolver a través de la justicia, judicializando la violencia policial. Hay que construir diálogos con la policía y esos diálogos implican también que no la demonicemos. De lo contrario nos quedará muy lejos. Tal vez, ese diálogo puede empezar reconociendo que el policía, antes de ser un policía, es un trabajador y también un ciudadano. La sindicalización policial puede no solo agregarle previsibilidad a los conflictos que legítimamente protagonicen, sino romper la obediencia debida que blindo o encubre la violencia policial, que impide a muchos agentes policiales, sobre todo a las mujeres policías (estamos hablando de una institución donde los policías varones son las figuras centrales), apartarse del mando toda vez que puede costarle una sanción de sus superiores.

Eso no implica que no haya que reprocharle judicialmente los delitos a las policías. Aunque la violencia policial, está visto, no es un problema que se va a resolver a través de los tribunales. Lo mismo podemos decir del delito callejero y predatorio. ¿Cuántos

pabellones hay en las cárceles argentinas que albergan a personas acusadas de haber cometido casos de tortura y gatillo fácil? ¿Cuántos pibes hay en la cárceles argentinas? Y el delito callejero sigue siendo una opción identitaria o económica para muchos actores. Los tribunales están para encarar casos concretos, pero las regularidades institucionales y sociales necesitan políticas públicas.

Con todo, la puesta en crisis de las políticas de seguridad de tolerancia cero y mano dura que organizaron las seguranzas en las últimas décadas —con algunas excepciones— necesita un nuevo marco político que reponga la cuestión social en un primer plano, que construya otros horizontes. Necesita de políticas de la amistad, es decir, que se desactiven las políticas de la enemistad que alimentan los pánicos morales; y para eso no solo hay que dejar de lado el lenguaje bélico (“la guerra al delito”, “lucha contra la droga”) a través del cual se hablaron muchas situaciones problemáticas, sino, sobre todo, dejar de lado la doctrina de las “nuevas amenazas” que nos hablan más de los intereses políticos de otros estados que de nuestros propios problemas. Necesita de la creación de nuevos espacios sociales que puedan recomponer los diálogos entre las diferentes generaciones, limando los malentendidos que llevan a que los conflictos escalen hacia los extremos, apuntalando nuevos mecanismos cotidianos de control social que tienen que estar hechos de comprensión. No es algo, como dije recién, que se podrá hacer de un día para el otro, se requiere mucha paciencia, se necesita que desactivemos el resentimiento vecinal, la cultura de la queja y el odio, y que la bronca que sienten legítimamente algunos actores sociales pueda finalmente procesarse políticamente.

Una política de seguridad que escuche y cuide a la víctima, pero no se deje llevar por sus pasiones y requerimientos urgentes. La seguridad no puede pensarse con la víctima de turno para dar respuestas puntuales a casos concretos y

tampoco haciendo bacheo policial, tapando agujeros. Se trata de reponer los tiempos largos, produciendo la información necesaria que permita elaborar políticas públicas universales y de oficio que puedan calar hondo, deconstruyendo imaginarios sociales y rutinas institucionales.

Una seguridad semejante no necesariamente requiere de una estructura ministerial propia. Al contrario, el estatus ministerial, está visto, no solo tendió a sobredimensionar los problemas sino a aumentar exponencialmente el presupuesto que después se destinaba a costear el equipamiento cuyo fin era darles más visibilidad a las policías. Eso sí, una agenda progresista y democrática necesita un acuerdo entre los diferentes sectores de la política para sustraer la cuestión de las coyunturas electorales. La elaboración de un plan de seguridad, que pueda abordar la complejidad de las conflictividades y violencias que mencionamos arriba, necesita de tiempos largos. Mal que les pese a los periodistas —los testaferreros de la víctima—, no hay respuestas para el diario de mañana. Cuando la gestión se organiza en función de la próxima elección, las respuestas que se ensayan se vuelven cortoplacistas, demagógicas y punitivistas. Una seguridad democrática, insisto, necesita de tiempos largos, es decir, de mucha paciencia. Las respuestas a las preguntas por la seguridad, que cargamos a la cuenta de la seguridad, no se van a resolver reclutando a la víctima de nuestro lado. No hablamos de una competencia apasionada sino de debates racionales o argumentados. Tampoco se van a responder citando de memoria los lugares comunes que hasta ahora organizaron la seguridad.

La seguridad democrática necesita un debate que estará hecho con muchos debates. Esos debates no son una materia pendiente, sino que se vienen llevando a cabo desde hace tiempo. Detrás de los debates está el dolor manifestado por las víctimas y sus organizaciones, pero también otras experiencias previas, es decir, el “ensayo y error” de gestiones pasadas; las

investigaciones realizadas en la última década y media en la Universidad Pública; la agenda cada vez más compleja que los organismos de derechos humanos han ido reelaborando y la capacidad de muchos movimientos sociales para arrojar luz sobre los problemas que aquí abordamos. Una seguridad democrática se va a nutrir de todas estas experiencias. No estamos en el grado cero.